

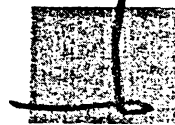
# Dime cuánto territorio controlas y te diré a qué puedes aspirar: Política y guerra irregular en Colombia

## RESUMEN

Este ensayo sugiere la siguiente hipótesis: en la guerra irregular colombiana los acuerdos políticos dependen de los resultados territoriales de la guerra. La política es, entonces, una extensión de la guerra territorial por otros medios. Sólo los que logren resultados favorables en lo militar y coaliciones sólidas locales podrán hacer parte de la coalición victoriosa que apuesta a conseguir una paz duradera.

## ABSTRACT

This essay suggests the following hypothesis: in the Colombian irregular war, political agreements depend on the territorial results of war. Politics is thus an extension of territorial wars through other means. Only those who achieve favorable military results and solid local alliances shall take part of the victorious alliance aiming at a lasting peace.



La guerra irregular que hoy se libra en Colombia está fundamentada en un acuerdo explícito de las partes comprometidas. Tanto el gobierno como las

organizaciones paramilitares y guerrilleras, creen que el Estado nacional de hoy no tiene el monopolio de las armas y que un nuevo Estado, legítimo y poderoso, deberá reemplazarlo. Un corolario, también compartido, se deriva de la anterior proposición: la parte vencedora (en alianza con otros grupos, por supuesto) tendrá derecho a crear un nuevo Estado legítimo. La inclusión graciosa de los vencidos como ciudadanos con derechos políticos hace parte, también, del programa de ambos. Más allá de la legitimidad del imaginario político de las partes en conflicto, me interesa evaluar la relación entre lo que pretenden los bandos enfrentados y la realidad de la guerra que hoy libran. Se trata de analizar lo que perciben, conjeturan y creen las partes comprometidas en el conflicto y lo que resulta de sus acciones en el campo de la guerra. Sugiero una hipótesis sencilla: en la guerra irregular colombiana los acuerdos políticos dependen de los resultados territoriales de la guerra. Sólo los vencedores y sus aliados parecen merecedores de alcanzar la paz.

Hace ya muchos años Clausewitz acuñó su fórmula capital: "La guerra es la continuación de la política por otros medios" (1994: 48-9). Clausewitz pensaba la guerra como el uso máximo de la fuerza letal del Estado para alcanzar ciertos objetivos. El objetivo superior era, por supuesto, mantener y expandir el po-

\* Profesor del Departamento de Economía, Universidad del Valle. El autor agradece los comentarios y sugerencias de María del Pilar Castillo, sin los cuales este artículo habría sido otro.



der de cada Estado nacional. Al mismo tiempo, sólo la conducción efectiva de la guerra podía garantizar la supervivencia y expansión de cada uno de ellos. El vínculo decisivo entre el poder del Estado y la guerra estaba así formulado. Los estados hacían la guerra para sobrevivir y sobrevivían como estados de acuerdo con su capacidad para librar la guerra (o para evitarla). La apoteosis de la unión entre estados nacionales y guerra ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y tuvo su primer episodio, masivo y generalizado, en Europa, en la confrontación ocurrida entre 1914 y 1918.

Pero si la guerra es la continuación de la política por otros medios y el ejercicio de la fuerza sin límite para desarmar al enemigo, ¿qué papel le correspondería al pueblo (o población civil) en ella? ¿Cuál al Estado o a su conductor, el gobierno? ¿Cuál a los que la conducen en forma directa? Aceptando el carácter cambiante de la guerra, Clausewitz (*op. cit.*: 51) supone que a cada uno le corresponde una función distinta: al pueblo, la enemistad, el odio, “el ciego impulso natural” que hacen posible la guerra; al ejército “el juego del azar y las probabilidades que hacen de ella una actividad libre de emociones”, y al gobierno los objetivos políticos.

Sin embargo, como lo ha señalado con agudeza Martin van Creveld (2000), la historia también cuenta y la unión, en apariencia indisoluble, entre estados nacionales y guerra está llegando a su fin. Las guerras de hoy, las que se libran en África, Asia, Latinoamérica y Europa, ya no comprometen a unos estados nacionales contra otros en el intento de expandir su control territorial o defender sus dominios, sino en la, hasta ahora, inútil lucha por mantener el monopolio de las armas en sus propios territorios. Inútil, porque las viejas maquinarias militares entrenadas para enfrentar a otros ejércitos regulares, no han podido luchar con éxito ante el desafío de múltiples organizaciones armadas que ofrecen los mismos servicios que antes pertenecían, de forma casi natural, al dominio del Estado nacional y sus funciones. Hasta hoy el balance es desfavorable para el Estado y sus ejércitos regulares. Tanto en Asia como en Oriente Medio, África y Latinoamérica, los resultados de los enfrentamientos entre los estados y las fuerzas insurgentes no convencionales han sido negativos para los primeros. Salvo en aquellos casos en que el Estado golpeó muy rápido

y muy fuerte y destruyó, a veces por medios ilegales o de una violencia extrema, a pequeñas bandas terroristas urbanas, o en los que usó el terror

y la tortura contra grupos insurgentes urbanos (al precio de perder la legitimidad y llevar al Estado a una crisis aún mayor, como ocurrió en el Cono Sur<sup>1</sup>), la percepción resultante es la de un Estado y un ejército regular incapaces de hacer frente con éxito al desafío de los nuevas organizaciones insurgentes o criminales que disputan su poder. En este nuevo contexto, ¿cómo entender la relación entre la guerra irregular que hoy se libra en Colombia y la estrategia política de las partes?

Antes de intentar una respuesta a esta pregunta, debe recordarse que la disputa por el monopolio del uso de la fuerza y de las armas no es un fenómeno nuevo en Colombia. Las llamadas guerras civiles del siglo antepasado –con su épica culminación hace cien años, en la Guerra de los Mil Días–, el conflicto armado vivido durante *La Violencia* clásica, y la guerra irregular que hoy nos ocupa tienen como elemento común la disputa del monopolio de las armas por parte de partidos políticos, organizaciones armadas de todas las tendencias y bandas criminales. El sueño de un Estado único, legítimo y fuerte nunca se ha visto realizado en Colombia. Por el contrario, lo que sorprende es la capacidad de supervivencia del Estado nacional en un contexto de lucha continua y de disputa permanente de su poder. Más aún cuando esa supervivencia se ha logrado a pesar de la visión restringida y miope de su carácter. Sin excepciones, los que han conducido al Estado han visto su fortalecimiento en la consolidación del centro andino y caribe de su territorio y en la ocupación tardía, militar y temporal de la periferia. Desde las guerras civiles del siglo XIX hasta las guerras de las organizaciones de narcotraficantes contra el Estado, pasando por todas las pequeñas y grandes guerras libradas por múltiples organizaciones guerrilleras y por la violencia partidista, las grandes batallas por el poder han sido libradas en el centro andino del país. Cuando la guerra se ha extendido a la periferia lo que ha estado en juego no es el ejercicio del poder en los territorios de frontera o de colonización reciente, sino su ejercicio en el corazón territorial del Estado. La historia de Guadalupe Salcedo ilustra bien lo que quiero decir: el temido comandante de las guerrillas del Llano que firmó la paz con el gobierno de

<sup>1</sup> El caso de Chile es distinto, por supuesto. Pero en Chile no había una insurgencia organizada, ni una geografía propicia para una guerra de guerrillas prolongada. Al mismo tiempo, el Estado militar sí perdió legitimidad, hasta el punto de que la dictadura, una vez cumplido su papel, debió ser desmontada.



la época, una vez en Bogotá, la capital de la República, no fue más que un simple ciudadano indefenso, acribillado a tiros en una calle cualquiera en una noche de whisky y parranda.

La situación resultante de esa larga relación entre Estado nacional y guerra no es fácil de analizar. A diferencia de lo ocurrido, por ejemplo, en los Estados Unidos, en donde la guerra civil del siglo XIX condujo a la derrota definitiva de una de las partes y a la centralización del Estado nacional en un gobierno federal, las guerras libradas en Colombia, en dos siglos de historia republicana, no han conducido a un resultado claro y definitivo en materia de centralización del Estado y de monopolio del uso de las armas. Fuerzas centrífugas y centrípetas han actuado en tiempos diversos con efectos de distinta duración y con impactos estructurales muy poco estudiados. Aunque suene paradójico, la ambigüedad del resultado ha permitido que las partes comprometidas en la guerra de hoy coincidan en el objetivo fundamental de construir un Estado nacional legítimo, poderoso y único, y en el ejercicio de un cálculo estratégico basado en la conservación de las ventajas económicas, militares y políticas obtenidas a lo largo de los años.

Surge, entonces, un problema fundamental: ¿cómo evaluar las relaciones entre la guerra irregular y la evolución del Estado nacional? En el mismo sentido: ¿Cómo evaluar las formas en que las partes piensan esas relaciones? ¿Con qué teorías leen y eligen sus propias acciones? ¿A partir de qué teorías formulan sus estrategias globales? Como dijo alguna vez Keynes, todo hombre práctico es prisionero de la teoría de algún economista muerto. En el mundo de la guerra, todo guerrero o todo jefe de Estado es prisionero de la teoría de algún pensador de la guerra ya fallecido. ¿Desde dónde, entonces, con qué ojos, a partir de qué conocimiento el Estado, los jefes de la guerrilla y de los grupos paramilitares leen la guerra de hoy en Colombia?

### ¿CUÁL ES LA GUERRA QUE SE LIBRA EN COLOMBIA?

Hay varios términos que se disputan la caracterización de la guerra que hoy se libra en Colombia. Desde el muy de moda "guerra contra el terrorismo", hasta el ya menos usado guerra o conflicto de baja intensidad, pasando por el de guerra irregular, o el de sistema de gue-

rra (Richani, 2003), todos apuntan a encontrar lo que hace al conflicto colombiano distinto de otros conflictos armados. La definición misma, por supuesto, es el resultado de hacerle grandes exigencias al lenguaje de la política y de la actividad militar: pretende captar, en un término conceptual, un sistema complejo de interacción entre múltiples fuerzas en un contexto histórico cambiante. Por eso, más que elegir el término más correcto o adecuado, entre todas las alternativas disponibles, prefiero tratar de entender el conjunto de actividades violentas y estratégicas que configuran una situación de conflicto que parece similar a la guerra o que tiene efectos parecidos a los de la guerra.

Entre todos los juegos disponibles y conocidos, dice Martin van Creveld:

(...) la guerra es el juego con la apuesta más alta de todas (*op. cit.*: 218).

Aceptar la definición de Van Creveld suscita una pregunta inmediata: ¿qué parte del conflicto armado colombiano puede entenderse como aquel juego que supone la apuesta más alta de todas? Juego aquí no es más que una interacción estratégica gobernada por un conjunto de reglas. En nuestro caso, el Estado colombiano, con todo su poder militar y su capacidad de movilizar hombres y voluntades, ¿puede reclutar los soldados que apostarán sus vidas en el juego de la guerra contra las fuerzas insurgentes? ¿Está en juego la supervivencia del Estado en esta guerra? En la medida en que otras organizaciones, no importa qué tan poderosas o tan pequeñas, se atrevan a desafiar su poder y a disputárselo en el terreno militar, puede afirmarse que la supervivencia del Estado está amenazada. El problema es qué tan grave es esa amenaza. Hasta comienzos de los años noventa del siglo pasado, la amenaza de las organizaciones guerrilleras no era considerada de vida o muerte para la continuidad del Estado. Localizadas en regiones distantes del centro de poder, las organizaciones guerrilleras no eran una amenaza para la estabilidad del corazón del Estado. El centro no percibía en las acciones de las organizaciones guerrilleras más que movimientos sin importancia en territorios que ni siquiera eran considerados como parte del Estado.

De la misma forma, las fuerzas guerrilleras y paramilitares han logrado desarrollar una capacidad efectiva para reclutar hombres y convertirlos en combatientes para sus organiza-

ciones. De nuevo, esta transformación ocurrió en la década del noventa: las organizaciones armadas al margen de la ley alcanzaron la capacidad suficiente para reclutar por la fuerza, por incentivos económicos, por simpatías auténticas o por la inercia de la situación económica y social en regiones periféricas, a miles de jóvenes. Son ellos los que, a nombre de la organización que los reclutó, apuestan sus vidas en el conflicto armado colombiano. No está de más señalar que la capacidad de reclutar hombres, junto con la de extraer tributación de los civiles, son dos de las condiciones mínimas que permiten hablar de un Estado primitivo o en formación (Tilly, 1990).

¿Qué es lo que apuestan las organizaciones guerrilleras y paramilitares en la guerra colombiana? ¿Su supervivencia? ¿Las ventajas económicas, políticas, militares que han logrado acumular en los últimos años? ¿Su poder de amenaza? ¿Su posición como enemigos legítimos de la autoridad del Estado? Más aún: ¿están dispuestas a apostar su supervivencia a cambio de una definición radical del conflicto en el que hoy se encuentran? Estas preguntas conducen, otra vez, a una pregunta que planteé antes: si las organizaciones guerrilleras y paramilitares son máquinas de guerra, ¿qué proporción de sus recursos y de su actividad está dedicada, en verdad, al juego supremo de la guerra? La guerra, por supuesto, exige recursos económicos crecientes. ¿Qué proporción, entonces, de sus recursos están dedicando a la consecución de recursos económicos?

Esta pregunta es fundamental porque permite pensar hasta qué punto las organizaciones guerrilleras y paramilitares se han especiali-

zado o no en el ejercicio de la guerra y qué tan costoso es para ellas sostener el esfuerzo bélico. He aquí el problema: para hacer la guerra hay que dejar de hacer la guerra. Hay que realizar actividades que desvían recursos y esfuerzos de la guerra misma: vigilar las plantaciones de coca, extraer tributo de la población civil y de las empresas, vigilar a los secuestrados, realizar inteligencia para llevar a cabo nuevas operaciones económicas, asegurar el funcionamiento de las redes que canalizan recursos públicos para la organización, coordinar y administrar todas las actividades que se derivan de una actividad económica creciente, invertir en forma productiva los excedentes financieros de la organización. Cada hombre armado, entrenado y listo para combatir es el producto de una inversión costosa en la adquisición de recursos económicos. ¿Cuántos hombres/año dedicados a la extracción de recursos se requiere, por ejemplo, para tener listo a un combatiente promedio? En general: ¿Cuánta guerra hay que dejar de hacer para seguir haciendo la guerra? No tengo una respuesta empírica, pero sí una hipótesis: en la medida en que la guerra se haga más intensa y más disputados los recursos económicos, toda organización (sobre todo las ilegales) tendrá que dedicar una proporción creciente de sus recursos al mantenimiento económico de la guerra.

Aquí aparece un dilema en el sentido que le da la economía política al término. Para hacer la guerra y para aspirar a ganarla las partes deben invertir una parte creciente de sus recursos en financiar esa guerra. Un mayor esfuerzo bélico supone, entonces, un mayor esfuerzo en la consecución de los recursos económicos que lo sostienen<sup>2</sup>. Cada combatien-



<sup>2</sup> Las posibilidades de innovaciones tecnológicas, ahorradoras de trabajo directo, son escasas. El auge de los cultivos ilícitos puede considerarse como un choque positivo del lado de la oferta, pero no como una innovación tecnológica en la búsqueda de recursos. Los impuestos pagados en forma voluntaria podrían serlo, pero la guerrilla tiene que disputar la tributación existente al Estado, a los paramilitares y a la delincuencia común.

te adicional implica haber desviado varios combatientes del esfuerzo de la guerra. La pregunta es, otra vez: ¿Cuánta guerra hay que dejar de hacer para seguir haciendo la guerra?

El dilema, sin embargo, no es simétrico. Mientras que las organizaciones guerrilleras y paramilitares deben conseguir sus propios recursos económicos restándole recursos a la guerra, el Estado puede ampliar su base tributaria, aumentar su pie de fuerza y preparar nuevos contingentes de combate sin tener que desviar recursos de la guerra misma. Pero esta no es una condición natural derivada de la legitimidad y del mayor tamaño del Estado. Depende, en forma estricta, de las elecciones estratégicas de quienes están en la dirección del Estado. Es claro que desde el 7 de agosto de 2002, la estrategia general del Estado con respecto a la guerra cambió. La estrategia de seguridad democrática de Álvaro Uribe apunta a dos objetivos básicos. El primero es reducir, o hacer más costosa, la financiación de las organizaciones guerrilleras. El segundo es la recuperación del territorio a través del despliegue y localización de tropas, policía y administración de justicia y de gobierno en los territorios en disputa o bajo el control de las organizaciones subversivas. La avalancha de fumigaciones que hizo trasladar buena parte de las plantaciones de coca del Putumayo a Nariño hace parte del primer objetivo. Como lo hacen también la feroz disputa territorial y económica que está ocurriendo en el oriente antioqueño, el Catatumbo, el sur de Bolívar y los corredores estratégicos de la costa Pacífica. En una competencia creciente por el acceso a los recursos económicos, la organización más grande y potente tiene una ventaja básica: no tiene que dejar de hacer la guerra para hacer la guerra. Si su estrategia es creíble y si tiene una voluntad política definida, puede ganar a los más ricos, y a los no tan ricos, para que contribuyan con un esfuerzo extra a la conducción de la guerra. El crecimiento observado de la tributación es un resultado inmediato de la puesta en marcha de la voluntad política del gobierno de Uribe. Una voluntad que se está convirtiendo, por primera vez, en la voluntad del Estado para conducir la guerra en los términos de una guerra irregular por el territorio, por los recursos económicos y por el poder.

¿Por qué la intensificación de la guerra ha tenido efectos distintos sobre el Estado y sobre las organizaciones guerrilleras y paramilitares? En otro lugar sugerimos (Salazar y Castillo, 2001) que el menor peso de lo burocrático y de lo administrativo en las organizaciones guerrilleras y paramilitares, y el hecho de que debían producir sus propios recursos económicos, las hacía más eficientes que las fuerzas militares del Estado. Lo dicho entonces no es contradictorio con lo afirmado aquí. El punto central es que la situación estratégica cambió.

De un lado, los éxitos militares y económicos de las Farc las llevaron a un crecimiento considerable. La guerrilla pequeña, compuesta de unos pocos miles de hombres, situada en regiones apartadas del centro, se transformó en un ejército con cerca de veinte mil hombres y un vasto poder económico y de amenaza. El Eln también creció en el mismo período y llegó a acercarse a los 7.000 hombres en su mejor momento. Con el crecimiento, vinieron nuevos problemas: ¿Cómo sostener un ejército de 20.000 hombres? ¿Cuántos recursos había que sustraer del ejercicio de la guerra para hacer la guerra como ejército? A primera vista, el crecimiento numérico de las Farc debería haber conducido a incrementar su amenaza militar y a la realización de operaciones militares de mayor escala en donde su juicio estratégico lo juzgara conveniente.

Pero la guerra es una lucha estratégica entre dos partes y lo ocurrido en los últimos años ha dependido en forma esencial de dos factores: del fortalecimiento de las fuerzas militares del Estado iniciada por el gobierno de Pastrana y de la puesta en marcha de la nueva estrategia de seguridad democrática del gobierno de Uribe. La primera apuntaba hacia la consolidación de una fuerza militar moderna y mejor dotada para combatir la amenaza de la guerrilla, la segunda a la reducción de las fuentes de financiación de las organizaciones guerrilleras, al incremento permanente de los costos de la guerra para estas últimas y a la recuperación del control territorial perdido.

El nuevo gobierno no sólo continuó la inversión que había iniciado el anterior en materia de hombres, armamento, información y tecnología, sino que puso su estrategia al servicio de una voluntad política definida y de un objetivo básico: recuperar el monopolio de las armas y el control del territorio. Por primera vez, un gobierno reconocía la pérdida de soberanía y de control sobre vastas regiones del territorio nacional. Por primera vez, también, se comprometía en una estrategia definida de recuperación y de ocupación del territorio perdido o nunca alcanzado. La puesta en marcha del plan estratégico implicó localizar fuerzas militares, entre ellas varias recién creadas y entrenadas, en aquellos lugares considerados como estratégicos para la economía y el movimiento de las organizaciones guerrilleras. Las fuerzas del Estado, de las autodefensas y de la guerrilla se han concentrado en los territorios de cultivo y comercialización de la coca, en las regiones de producción petrolera y minera, en general, en las regiones de mayor potencial tributario y en los corredores de movilización estratégicos. Cada peso extraído de esos territorios en disputa se hace cada vez más costoso. Lo que antes eran economías de enclave, resguardadas por fuerzas guerrilleras o de autodefensa, con



poblaciones bajo su férreo control, hoy se han convertido en escenarios de confrontación militar. La guerra sigue siendo guerra, por supuesto, pero ahora la guerra se ha convertido en una guerra por la disposición de los recursos económicos necesarios para continuar la guerra. El rodeo estratégico se ha hecho más largo y costoso: para que la guerrilla pueda realizar una operación ofensiva requiere hoy de muchos más hombres, de muchos más recursos dedicados a la adquisición y defensa de recursos económicos de los que requería, por ejemplo, en 1998. Mantener la posición estratégica que había logrado antes se hace cada vez más costoso, difícil e incierto. La posibilidad de avances estratégicos se hace cada vez más lejana y difusa y amenaza con convertirse en cosa del pasado –un pasado muy reciente, pero que ahora parece lejano.

Lo anterior no quiere decir que la estrategia del Estado haya resultado exitosa y garantice, en el largo plazo, la inmovilidad de la guerrilla, la detención de su crecimiento y su derrota política y militar. He aquí el problema: la localización de batallones de alta montaña en puntos de importancia estratégica, la puesta en acción de brigadas móviles, la ocupación de territorios y la destrucción de cultivos ilícitos han tenido, hasta ahora, una respuesta mesurada de parte de las Farc. Un repliegue general de fuerzas hacia los puntos menos vulnerables de su retaguardia, el regreso a operaciones basadas en grupos más pequeños, el uso del terror en ciudades intermedias y en lugares en disputa, o que han dejado de pertenecer a territorios bajo su control, indican que la estrategia de las Farc está privilegiando la conservación de fuerzas sobre la confrontación directa con las tropas del Estado. En una situación así, ¿cómo evaluar lo que ha conseguido el Estado? ¿En qué proporción ha logrado sus objetivos estratégicos? Y en el futuro, ¿qué logros puede obtener? Puede imaginarse una trayectoria ideal de este tipo: la presión sobre los recursos económicos y la falta de actividad militar podría llevar a un crecimiento continuo de la desertión guerrillera. El número de hombres de la guerrilla descendería, en forma continua, hasta alcanzar un piso en su núcleo militar básico, es decir, en sus tropas de élite, mejor preparadas en lo militar y en lo ideológico. El espacio territorial bajo su control también se reduciría y tendría dificultades crecientes para conseguir los recursos económicos que le permitirían mantener ac-

tivo y seguro al núcleo básico que la estaría sosteniendo. Todo esto depende de dos supuestos: que el Estado pueda sostener el mismo nivel de gasto militar, y que el ejercicio del poder en los territorios recuperados le permita ganar la legitimidad necesaria para convertir el control territorial en ganancias políticas.

En términos analíticos y especulativos, que el ejercicio del poder estatal se vuelva legítimo va a depender de varios factores. El primero de ellos es qué tan desprendido del Estado, qué tan fuera de su control ha permanecido el territorio en disputa. Los colombianos tendemos a olvidar la historia y entre esos olvidos está el de que algunos de los territorios, que hoy el Estado pretende recuperar, o han sido “construidos” por fuerzas insurgentes, o son el producto de migraciones forzadas hacia los márgenes del país, o han tenido, en general, una historia hecha *por fuera de y contra* del Estado nacional. En ciertas regiones del Caquetá, del Casanare, de Arauca, del Meta, de Cundinamarca y del Tolima el Estado, con sus tropas, su policía encerrada en búnkers, sus fiscales y sus alcaldes amenazados, es un recién llegado, un desconocido que no ha hecho parte de su historia. El segundo es qué tan fuerte es el tejido social creado por las fuerzas guerrilleras y paramilitares. De nuevo, la historia cuenta: allí donde varias generaciones de familias han convivido con las Farc o con el Eln, el arribo del Estado no puede ser visto como la solución de todos sus problemas. Cuéntese el número de civiles detenidos en las operaciones de rehabilitación y ocupación en regiones con un largo dominio de las organizaciones guerrilleras y se confirmará que el Estado está entrando en una confrontación con los civiles y corre el riesgo de excederse en el aspecto represivo de sus medidas, y de hacer la vida más difícil para sus habitantes. Tercero, el éxito del Estado dependerá de los errores y del grado de ilegitimidad de la dominación ejercida por las organizaciones armadas ilegales. Allí donde la guerrilla ha actuado como un ejército de ocupación y ha depredado sin límite a civiles y empresas, la tarea del Estado es mucho más fácil. Allí donde las organizaciones guerrilleras han conducido procesos de colonización y han garantizado precios y condiciones de vida para muchos colombianos expulsados del centro de la nación, le será muy difícil al Estado no actuar como una fuerza de ocupación que debe usar la violencia, la arbitrariedad y la fuer-

za para imponer su dominio. De hecho, es lo que hoy está ocurriendo en las llamadas zonas de rehabilitación y consolidación. Las filas de prisioneros que muestra la televisión no tienen uniforme: son civiles acusados de colaborar con las organizaciones guerrilleras, de ser guerrilleros disfrazados de civiles o de actuar como milicianos en veredas y cabecezas municipales.

Por su parte, las Farc parecen confiar en otro escenario: un sistemático desgaste político del Estado, proveniente de no poder producir los resultados definitivos prometidos y de un desborde de la situación de desigualdad social existente. No es difícil intuir que mantener el alto nivel de gasto militar depende de los resultados obtenidos y de la percepción que tengan los contribuyentes del progreso alcanzado en la guerra. Mantener batallones de alta montaña y brigadas móviles es costoso. Mantenerlos sin combatir al enemigo, en sitios de difícil acceso, con poca población y con poco apoyo de una población escasa, y ya de por sí atemorizada y endurecida por la guerra, es aún más costoso. Mantenerlos sin resultados efectivos que puedan ser consumidos, en directo, por una opinión pública conducida por las expectativas de victoria total y cercana promovidas por el gobierno es costoso en el sentido estratégico del término. La restricción temporal se vuelve crucial en este punto: ¿En cuánto tiempo pueden producirse resultados decisivos? ¿Uno, dos, tres, cuatro años? ¿En cuánto tiempo pueden “secarse” las fuentes de financiación de la guerrilla? El cambio de actitud de la opinión pública y de los contribuyentes va a depender de las expectativas que hoy se están haciendo con respecto a la cercanía y magnitud de los cambios esperados en el estado de la guerra. El paso del optimismo eufórico de las Farc en 1998, cuando la idea de la toma del poder había comenzado a tener visos de realidad probable, al pesimismo moderado y creciente que se deriva de la inmovilidad militar y del regreso a la guerra de guerrillas configura un cambio radical en el régimen de expectativas de las Farc. Tanto en la dimensión organizativa, como en la individual, lo que hoy esperan las Farc no es lo mismo que esperaban en 1998, ni es igual a lo que esperaban en el año 2000, ó incluso, en febrero del año pasado.

Al mismo tiempo, este repliegue estratégico de las Farc afecta la efectividad de la estrategia conducida por el Estado. Piénsese en esta situación: como resultado de la interacción estratégica entre guerrillas y Estado, la guerra se hace más costosa para las primeras pero, al mismo tiempo, la confrontación militar abierta disminuye en forma sistemática y el núcleo básico de las Farc se mantiene intacto. Los resultados prometidos no llegan con la celeridad esperada y los contribuyentes comienzan a preguntarse por la efectividad de sus inversiones tributarias en una solución militar del con-

flicto. En una situación así, el Estado también tendrá dificultades crecientes para conseguir los fondos necesarios para mantener el esfuerzo bélico. La clave de todo está en los cambios del régimen de expectativas de gobernantes, contribuyentes y jefes guerrilleros. Si los contribuyentes juzgan que la situación está cambiando en forma favorable para el Estado, mantendrán su esfuerzo tributario, invertirán en la economía, y la estrategia de seguridad continuará. Pero si juzgan el progreso de las fuerzas del Estado como muy lento y perciben sus esfuerzos como inútiles, las expectativas cambiarán de nuevo y habrá una nueva oscilación hacia el otro extremo: la llamada solución negociada volverá a estar en la agenda de gobernantes y contribuyentes y la situación estratégica se transformará.

La apuesta estratégica para las partes puede resumirse así: Para las organizaciones guerrilleras, y para las Farc sobre todo, la restricción decisiva está en el costo creciente de mantener su aparato de guerra, es decir, en cuánta guerra tienen que dejar de hacer para continuar haciendo la guerra. En la medida en que sus fuentes de financiamiento dependan de las acciones del enemigo y de las acciones de la población rica, cada nueva unidad de recursos económicos obtenidos se va a hacer más costosa en el tiempo. Se dirá, claro, que las reservas financieras de las Farc garantizan su supervivencia por un tiempo considerable. Sí, pero el punto está en que las condiciones de supervivencia y de expansión se están haciendo cada vez más difíciles y que, al menos en las condiciones de hoy, la guerrilla no está creciendo.

Para el Estado la restricción básica surge de la relación entre las expectativas de los que pagan impuestos y los resultados reales obtenidos por el Estado en su estrategia de recuperación del control territorial. En últimas, se trata de una restricción temporal: dependiendo del tiempo esperado para asegurar la derrota militar de la guerrilla, será más o menos fuerte el viraje en las acciones de los que pagan impuestos. Es decir, si la población que realiza el esfuerzo tributario espera una victoria en el transcurso de un período presidencial, es probable que la falta de resultados frustre las expectativas y haga cambiar las conjeturas de la población que paga impuestos con respecto a la probabilidad de una victoria definitiva del Estado sobre las fuerzas subversivas.

Este análisis global debe ser matizado con lo que ocurre en el plano regional. Las zonas de colonización armada, de protección de cultivadores ilícitos y, en general, todas aquellas regiones en las que el Estado tiene que actuar como un ejército y como una fuerza de ocupación, le permiten a la guerrilla ganar espacios en los que todavía puede actuar como fuerza de protección<sup>3</sup>, o como Estado primitivo. Esto

<sup>3</sup> Lo que está ocurriendo en Arauca es un buen ejemplo: la guerrilla no permite que la empresa que presta el servicio de electricidad cobre las cuentas a los usuarios. Sin embargo, exige reparación inmediata de las torres que ellos mismos sabotean. En términos económicos, la población está mejor que antes. En términos políticos no se sabe: todo depende de la correlación de fuerzas entre el Estado y la guerrilla en la región.



no garantiza, por supuesto, el relajamiento de la restricción presupuestal ya planteada, sólo le da a la guerrilla un espacio de manobra política local y de supervivencia en medio del avance de la estrategia de seguridad del Estado.

#### GUERRA Y POLÍTICA

Si la guerra es el juego con la apuesta más alta de todas las apuestas posibles, ¿qué papel puede tener el juego de la política en una situación de guerra prolongada como la nuestra? ¿Desaparece en medio del estruendo de la guerra? No, pero se vuelve un juego siempre superado ante los ojos de los que han aprendido a mejorar su situación relativa a través del ejercicio de la guerra, de la amenaza y del terror. Tanto para las organizaciones guerrilleras como para las paramilitares, o de autodefensa, el ejercicio del poder a través de la guerra les ha dado mejores resultados que el puro ejercicio de la política democrática. Como ya se ha dicho muchas veces, la simple comparación entre el pequeño núcleo que huyó de Marquetalia, ante el asedio de las fuerzas armadas del Estado, y el enorme ejército que hoy son las Farc, o la comparación entre los pequeños grupos paramilitares, al servicio de narcotraficantes, y los ejércitos que hoy negocian con el Estado, dan una idea clara de qué tan bien ha pagado el hacer la guerra como un medio para prevalecer en la política.

Las consecuencias para el ejercicio de la política son graves. En aquellas regiones en donde paramilitares y guerrillas han ejercido el control político, cobrado tributación e impartido justicia a su manera, el juego de la política democrática no ha tenido un espacio signi-

ficativo. El voto obligado por candidatos únicos impuesto por los paramilitares en sus regiones de influencia y la abstención obligada, o el voto por su candidato, decretados por las Farc y el Eln en sus territorios dicen muy bien qué tanto creen ambos bandos en las bondades de la competencia política, en la diversidad de corrientes y de alternativas y en el libre juego democrático. Desde su punto de vista no les falta razón: lo que han conseguido a través del muy duro juego de la guerra no lo van a arriesgar en un ejercicio que no conocen y en el que los resultados no dependen de su nivel de amenaza ni de su habilidad y arrojo militares, y ni siquiera de la justeza o pertinencia de sus propuestas. Todo el mundo sabe que el ejercicio de la política no tiene buen nombre en Colombia: es sinónimo de corrupción, de engaño, de falta de transparencia, de depredación de lo público. En aquellas regiones en que el sistema político tradicional nunca logró imponerse o falló ante el avance de la guerra irregular y del desbarajuste de la política, las organizaciones armadas al margen de la ley pueden ser una alternativa de poder basada en el ejercicio del poder sin mediadores políticos y a través de contratos directos entre guerreros y civiles.

Esto no quiere decir que paramilitares y guerrillas no hagan política. Sí la hacen, a su manera, dentro de las reglas provenientes de su visión del poder, excluyendo aquello que no pertenece al dominio de su visión de lo político. Los paramilitares, por ejemplo, han realizado coaliciones, más o menos abiertas, con élites, políticos locales y hasta con antiguos grupos guerrilleros. Lo han hecho en Urabá, en Córdoba, en el sur de Bolívar, en el Magda-





lena Medio, en Antioquia, en el norte del Valle del Cauca. Y, claro, aceptan el veredicto de las urnas siempre y cuando los favorezca y hayan podido moldear su ejercicio hasta el punto en el que sólo su opción pueda imponerse. La política se convierte, entonces, en una extensión de la guerra. Las coaliciones se hacen para asegurar el poder logrado mediante el ejercicio de la guerra.

Las Farc y el Eln han ejercido el poder a través de la cooptación, de la amenaza o de la eliminación de políticos y funcionarios estatales. Los alcaldes de ciertos municipios tienen que decidir entre aceptar las condiciones de la guerrilla o abandonar su cargo y la región en la que habían sido elegidos. De nuevo, el pasado dejó algunas enseñanzas: allí donde intentaron combinar todas las formas de lucha y mantener a funcionarios y legisladores elegidos en forma democrática, el resultado fue la aniquilación física y sistemática de sus fuerzas políticas y las de sus aliados. Hoy, el control sobre la tributación y sobre los proyectos de inversión se ejerce en forma directa, sin pasar por el juego democrático, mediante la cooptación, la amenaza y la división de las rentas involucradas. Germán Castro Caycedo (2003) ha descrito muy bien la forma en que las Farc controlan vidas, negocios y administración pública en el Casanare y Arauca. Lo hacen sin tener que recurrir a procesos electorales y democráticos. Incluso cuando estos logran realizarse, las Farc sólo tienen que discutir los términos de su convivencia con los elegidos. Pero este modelo de control estatal primitivo está siendo atacado por la estrategia de seguridad democrática del gobierno de Uribe. Ante la imposibilidad de enfrentar militarmente a las Farc, el gobierno ha tenido que recurrir a la acción directa sobre los presuntos, o reales, colaboradores y milicianos de la guerrilla y, en general, sobre todo el tejido social que se creó bajo el control político de las Farc. Es una situación paradójica que refleja la apuesta política y estratégica hoy predominante en Colombia: un aparato estatal que ha ganado su legitimidad en el centro andino y caribeño del país está intentando desmontar un aparato estatal primitivo situado en uno de los márgenes “ricos” del país. Los métodos son los de la guerra, los resultados sobre el ejercicio de la política son previsible, los efectos sobre la situación estratégica en general son difíciles de prever. Sin embargo, no es difícil señalar las dos alternativas más probables: la negociación del poder local de acuerdo con los resultados de la guerra y de las coaliciones que se formen sobre la marcha, o el intento de aniquilar el tejido social de la guerrilla en las zonas bajo su protección, conduciendo a una situación de guerra prolongada.

El resultado obtenido en las pasadas elecciones presidenciales puede servir como síntoma de los temores fundados de los agentes armados ilegales cuando se trata de ejercer la políti-

ca democrática. En Córdoba, fortín paramilitar bajo el control férreo de una coalición surgida alrededor de la estrategia de las autodefensas, los electores favorecieron a Horacio Serpa Uribe, el candidato liberal que denunciaba las cercanías entre su competidor, Álvaro Uribe, y las organizaciones paramilitares. En el Caquetá, en pleno territorio de las Farc, los electores también tomaron la vía contraria y favorecieron con sus votos a Álvaro Uribe, enemigo jurado de las Farc. El secreto del voto y la posibilidad de disentir no van de la mano con dominaciones políticas despóticas. Como tampoco el control férreo de la competencia política, ejercido por las organizaciones armadas, aliadas con grupos locales, es compatible con el libre ejercicio de la política.

En una situación así, ¿por qué habrían de aceptar las organizaciones armadas ilegales el ejercicio de la política? ¿Por qué habrían de aceptar la posibilidad de ser derrotados en competencias electorales y democráticas? ¿Cuál debería ser el tipo de pago (en el sentido de la teoría de juegos) que deberían obtener, o esperar, para que aceptaran dejar las armas y entrar en el juego de la política democrática?

Hay una respuesta conocida: debería privilegiarse la inclusión de todos los agentes armados y no armados en una coalición que garantice el libre ejercicio de la política. La inclusión de todos haría, por supuesto, que los costos de hacer la guerra fueran demasiado altos comparados con las ganancias derivadas de participar, en pie de igualdad, en la competencia política.

Sin embargo, varias dificultades se derivan de este tipo de propuesta. La primera pregunta es: ¿Quién incluye a quién? ¿Quién acepta ser incluido en el proyecto político del otro? Más aún: ¿Quién podría conducir a todas las partes hacia la inclusión? ¿Quién sería el agente que podría incluir a los demás agentes en su proyecto político y contar con la aprobación de éstos? Es fácil ver que los dos proyectos políticos antagónicos —el del gobierno de Uribe y el de las Farc— proponen incluir al otro como derrotado de la guerra irregular que hoy libran. El gobierno, por su parte, espera haber encontrado el valor óptimo<sup>4</sup> al que guerrilleros rasos y comandantes de mediano nivel se rendirían y se reintegrarían, en forma individual, a la vida civil. Los límites de esta propuesta son obvios: el núcleo básico de las Farc y del Eln no va a optar por esta salida individual, y sólo guerrilleros muy jóvenes, casi niños en ocasiones, que no cuentan con mayor experiencia militar, son los que han aceptado la opción que les brinda el gobierno.

Las limitaciones reales de ese tipo de propuestas pueden verse en la interpretación de los acuerdos de sometimiento de las organizaciones paramilitares y de autodefensa. Siguiendo la misma línea elegida para enfrentar a la gue-

<sup>4</sup> El hallazgo del botín de El Caguán, y su apropiación por parte de los soldados que lo encontraron, indica que hay también un valor óptimo de desertión para soldados y oficiales. Es un valor que puede encontrarse también en cada transacción corrupta en la que participan soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas.

rrilla, el gobierno pretende haber encontrado el valor óptimo en el que las fuerzas paramilitares están dispuestas a dejar las armas y aceptar el monopolio de las armas por parte del Estado. A cambio de no ser juzgados por los delitos atroces cometidos y de reintegrarse a la vida civil, las organizaciones de autodefensa aceptan dejar las armas y la pretensión de reemplazar al Estado como protector de las vidas y propiedades de sus clientes. La lectura del gobierno es consistente con su estrategia: las autodefensas estarían reconociendo el monopolio de las armas por parte del Estado y la inutilidad de su oferta de protección a los ciudadanos amenazados y depredados por la guerrilla. Lo que la lectura del gobierno no reconoce es el carácter político y local de los acuerdos con las autodefensas. Ha sido la convergencia de coaliciones locales, del ejercicio exitoso del terror y de una política de Estado lo que ha conducido a los acuerdos con los paramilitares. Las fuerzas de Castaño y Mancuso no se sienten seguras porque hayan firmado un acuerdo con el gobierno de Uribe. Por el contrario, han firmado un acuerdo porque se sienten seguras en aquellas regiones en las que han logrado sellar, a sangre y fuego, pactos políticos con las élites locales y con otras fuerzas comunitarias y políticas<sup>5</sup>. Es el resultado de la guerra el que ha permitido lograr, o más bien confirmar, acuerdos políticos. En ese sentido, el mapa de la guerra contribuye a reconstruir o a rehacer, con trazo seguro, el mapa de la política.

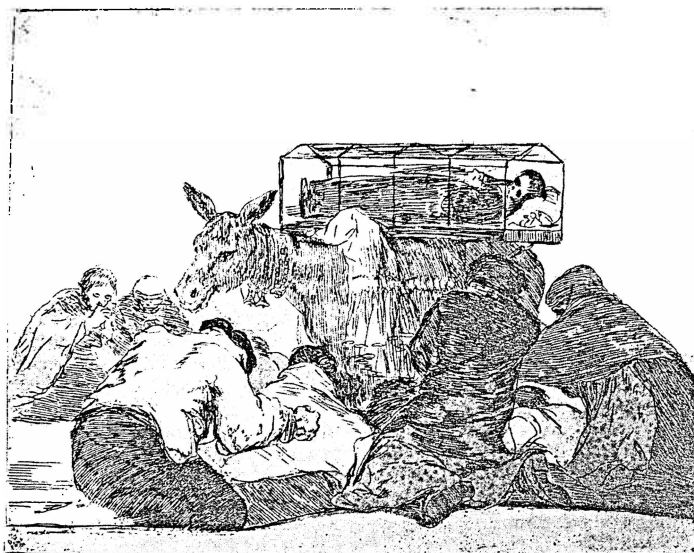
Por su parte, las Farc aspiran a derrotar al Estado y al establecimiento, o al menos a hacerles perder su deseo de ganar la guerra, para imponer un proyecto que incluiría a todos aquellos que acepten su dominación y aspi-

ren a contribuir al nuevo Estado. La propuesta pública de las Farc también opta por la inclusión –en sus términos:

Estamos hablando de un Estado cuya gestión económica se caracterice por su ética, su productividad, su alta calidad y en la cual sea decisiva la participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas. Así se podrá definir una sola estrategia y una sola política económica que consulte el interés mayoritario y con visión de futuro (Lozano, 2002: 67).

Como se puede observar, la propuesta de las Farc incluye a todos los agentes económicos en una coalición mayoritaria que definiría la estrategia económica a seguir por el nuevo Estado en formación. No dice qué ocurrirá con quienes no quieran pertenecer a esta coalición ni cómo se formará el consenso mayoritario en la definición de las estrategias básicas. Tampoco dice cuáles son las condiciones de participación en la coalición mayoritaria y si la agenda o propuesta de las Farc estará en discusión, y si dependerá de las decisiones mayoritarias de la coalición formada. Aunque el texto no es explícito al respecto, queda la sospecha de que los participantes de la coalición son aquellos que han aceptado la victoria y, por lo tanto, la propuesta de las Farc. En últimas, la inclusión en la propuesta de las Farc pasa, también, por el resultado de la guerra: el ejercicio de la guerra lleva al enemigo y a toda la sociedad a aceptar la negociación del poder o la derrota. No hay, entonces, inclusión que sea ajena a la guerra.

¿Puede haber combinaciones entre inclusión y guerra? ¿Es la política un sustituto de la guerra? El Informe Nacional sobre Desarrollo



<sup>5</sup> Un ideólogo de las autodefensas, Hernán Gómez, planteó, hace ya más de dos años, en forma directa la evaluación estratégica de la situación en una guerra por el control territorial: "En esta guerra sólo se va a tener en cuenta a los que controlen economías lícitas o ilícitas y el grueso de la negociación de paz se dará ante los grupos armados que dominen territorios de coca, laboratorios y pistas de aterrizaje. El que no maneje estos territorios no tiene nada que negociar. ¡Te mandan al carajo! ¿Qué vas a entregar?" (Aranguren, 2001: 203).

Humano, *El conflicto, callejón con salida* (2003), responde de manera afirmativa. Supone que la política –entendida en el sentido más amplio del término– puede sustituir de manera efectiva a la oposición armada, o al simple uso de las armas para ejercer el poder o avanzar agendas concretas de reformas. Propone trabajar con miras en la inclusión mientras se hacen esfuerzos en lo militar. Propone, también, darle todo el espacio y las garantías democráticas a la protesta popular y a los movimientos sociales. Lo hace a sabiendas de que las protestas han sido superadas, liquidadas o utilizadas por organizaciones armadas de todo tipo. El Estado, entonces, debería garantizar el derecho a la movilización y a la protesta sociales, protegiéndolas de forma efectiva, y renunciando al uso de las armas y de la fuerza para reprimirlas en favor de intereses particulares y privados. Al mismo tiempo, el Estado debería proteger la protesta social de la infiltración y manipulación por parte de las diversas organizaciones armadas ilegales. Todo esto es razonable y deseable. La dificultad está en que las posibles combinaciones entre política y guerra, o entre política y esfuerzo militar, no pueden esconder la existencia de un *trade-off* o conflicto entre las dos. Cuando la guerra se ha convertido en la actividad que permite ejercer el poder, así sea local o regional, de una forma más rápida o expedita, la política deviene una actividad subordinada, menos efectiva en términos de ejercicio del poder. Lo dice el mismo informe:

En Colombia la oposición desarmada ha sido víctima de la oposición armada (*op. cit.*: 384).

¿Quién protegería entonces a la oposición desarmada? El Estado legítimo, por supuesto.

No es difícil detectar que su propuesta está dirigida al Estado y a quienes lo dirigen. El Estado debería mejorar sus resultados en lo militar, mientras trabaja desde ya en la inclusión del mayor número de colombianos en lo que sería el nuevo Estado legítimo que aparecería al final del callejón en que nos encontramos.

Sin embargo, el fantasma muy real de la guerra aparece aquí otra vez para hacer las cosas más difíciles. Como decía más arriba, las coaliciones políticas (incluso aquellas que toman la apariencia de rendición ante la autoridad del Estado) están marcadas por los resultados de la guerra. Por ejemplo, la desmovilización de las autodefensas en Urabá, Córdoba y el sur de Bolívar está basada en la percepción de una victoria militar en esas zonas, y en la existencia de coaliciones sólidas con las élites locales (Romero, 2003), algunas organizaciones sociales, antiguos enemigos y políticos tradicionales. Allí donde las autodefensas se sienten seguras, porque así perciben el veredicto de la guerra que han librado en los últimos quince años en esos lugares, allí también pueden jugar a la inclusión dentro de unas reglas del jue-

go que ellos mismos han contribuido a diseñar. Allí donde ese control no es claro, donde hay fuerzas (incluso pertenecientes a la misma organización) que ponen en peligro su supervivencia, la opción estratégica es hacer la guerra, rápida y cruenta, tal como hoy la libra una coalición de las autodefensas contra sus antiguos camaradas del Bloque Metro en el área metropolitana de Medellín, y en los llanos del Casanare.

Obsérvese, sin embargo, que no puede decirse lo mismo de los territorios controlados, en grados diversos, por la guerrilla. En el caso de que la actual fase de la estrategia de seguridad del gobierno se mantenga, no habrá negociación en aquellos territorios en los que la guerrilla conserva algún control y no ha podido ser desalojada en forma definitiva. Sólo si la estrategia del gobierno comienza a fallar y las expectativas de victoria inmediata a desinflarse, es probable que se inicie alguna negociación local. Para que tal evento ocurra, por supuesto, las conjeturas del gobierno y de las Farc con respecto a una victoria definitiva, en la que pueda incluir al enemigo derrotado, deberán haber cambiado de plano.

## CONCLUSIONES

La posibilidad de realizar acuerdos políticos duraderos en Colombia depende, de forma crucial, de los resultados de la guerra irregular que hoy libran el Estado, las fuerzas paramilitares y las organizaciones guerrilleras. La política no es más que la continuación de la guerra por otros medios. En una guerra en que ambas partes están de acuerdo en incluir al enemigo derrotado, y a las fuerzas sociales que así lo quieran, en una coalición duradera, todo gira alrededor de los resultados reales de la guerra y de la percepción que de ellos tengan las partes involucradas. Las coaliciones que salen victoriosas de la guerra están en capacidad de incluir bajo su protección a las fuerzas que así lo quieran y de excluir al enemigo derrotado.

Por tratarse de una guerra por el control de territorios y poblaciones, lo local es decisivo. Cada una de las partes cuenta con probabilidades de victoria más o menos altas de acuerdo con el poder relativo de sus coaliciones y con los resultados obtenidos en el ejercicio amplio de la guerra (lo que incluye el terror y otras prácticas no aceptadas por el DIH) en regiones específicas del país. A pesar de las grandes inversiones del Estado en el despliegue de sus fuerzas militares y de su soberanía por todo el territorio nacional, los resultados obtenidos no pueden ser homogéneos: varían de acuerdo con la correlación de fuerzas, el estado de la guerra y el tipo de coaliciones existentes en cada territorio. Los acuerdos victoriosos de Urabá y Córdoba contrastan, por ejemplo, con los lánguidos resultados obtenidos en la dis-



puta feroz por el control de la riqueza, el territorio y la población civil en Arauca y Casanare.

La pretensión de construir un Estado nacional, único y legítimo, sigue siendo eso: una pretensión. En ella concuerdan el Estado y las Farc. De su interacción estratégica emerge una realidad distinta: una división territorial moldeada por el ejercicio de la guerra y por la formación de coaliciones que re-

flejan el estado de la confrontación y la historia de cada territorio. Al ser el juego con la apuesta más alta de todas, la guerra supera a la política y la convierte en su extensión necesaria. Es lo que está ocurriendo en Colombia. Mientras no reconozcamos el impacto permanente del ejercicio de la guerra sobre la política, no podremos entender lo que hoy hacen las partes en nombre de la búsqueda de la paz y de un Estado nacional legítimo.

## REFERENCIAS

Aranguren, M., 2001, *Mi confesión. Carlos Castaño revela sus secretos*, Bogotá: Editorial Oveja Negra.

Castro, G., 2003, *Sin tregua. Ni en la muerte, ni el destierro, ni el despojo del Estado*, Bogotá: Planeta.

Informe Nacional de Desarrollo Humano (Hernando Gómez B., director), 2003, *El conflicto, callejón con salida*, Bogotá: PNUD.

Richani, N., 2003, *Sistemas de guerra. La economía política del conflicto en Colombia*, Bogotá: Temas de hoy.

Romero, M., 2003, *Paramilitares y autodefensas 1982-2003*, Bogotá: Temas de hoy.

Salazar, B. y M.P. Castillo, 2001, *La hora de los dinosaurios. Conflicto y depredación en Colombia*, Bogotá: Cerec, Cidse.

Tilly, C., 1990, *The Formation of National States in Western Europe*, Cambridge, MA: Basil Blackwell.

Van Creveld, M., 2000, *The Rise and Decline of the State*, Nueva York: Cambridge University Press.